

EL FORO VALENCIANO,

Revista de Legislacion y Jurisprudencia;

ÓRGANO OFICIAL DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS Y DE LA ACADEMIA VALENCIANA
DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA.

SECCION DOCTRINAL.

Artículo 1016 del Código de Comercio: *La declaracion formal del estado de quiebra se hace por providencia judicial á solicitud del mismo quebrado, ó á instancia de acreedor legitimo cuyo derecho proceda de obligaciones mercantiles.*

Aunque la letra de este artículo no deje duda alguna acerca de su parte dispositiva; aunque de una manera clara y terminante se establece, que la declaracion del estado de quiebra se hace á instancia del quebrado ó de acreedor legitimo, en cuyas frases no hay un solo nombre que por oscuro dé lugar á la interpretacion; todavia se ha suscitado una cuestion de sumo interés para el comercio de buena fé, y de aplicacion práctica para los tribunales de justicia. Redúcese á investigar, si el acreedor único de un comerciante puede pedir que se le declare en quiebra; esto es, si á pesar de que la Ley usa la palabra *acreedor legitimo*, debe ó puede entenderse que esta frase, si bien concede la iniciativa á todo acreedor, haya de ser bajo el supuesto de que existan otros acreedores, pues de lo contrario no es dable la declaracion formal del estado de quiebra.

Hemos visto sostenida esta cuestion por los eminentes Jurisconsultos que han anotado el Código de Comercio y la Ley de Enjuiciamiento mercantil; y á la verdad, la opinion que en el mundo científico gozan los señores Gomez de la Serna y Reus, que la resuelven en sentido negativo, nos han hecho vacilar por algun tiempo, desconfiando de nuestra opinion contraria á la suya; si bien nos hemos afirmado, al meditar, no solo acerca de las disposiciones terminantes contenidas en el Código, sino sobre las razones en que aquellos se fundan, las que consideramos de escasa valía; llegando á concluir que bien puede un acreedor *único* pedir la declaracion en quiebra de un comerciante deudor suyo siempre y cuando el crédito emane de obligaciones mercantiles.

Los ilustrados anotadores del Código fundan su opinion en las siguientes razones: *Primera*, porque la Ley habla siempre de suspension de pagos, lo cual supone que han de ser varios los acreedores. *Segunda*, porque la tramitacion del procedimiento de quiebra está basada en la concurrencia de acreedores. *Tercera*, porque el artículo 1026 del Código ordena, que para declarar la quiebra á instancia de los acreedores, no basta que haya egecu-

ciones pendientes contra el comerciante, mientras este manifieste y se hallen bienes disponibles sobre que trabarlas. Y cuarta (que llaman la principal), porque cuando hay un solo acreedor, este tiene medios mas sencillos, mas fáciles, mas espeditos para cobrar su crédito; tales como la vía ejecutiva, etc.

Nosotros nos haremos cargo de estas razones y las contestaremos tan luego hayamos espuesto los fundamentos que nos sirven para decidirnos por la afirmativa; fundamentos que no son otros que la ley misma.

Considerada la quiebra como el estado de un comerciante, que por trastorno ó desarreglo de sus negocios ha sobreseido en el pago de sus obligaciones, es indispensable tener á la vista el objeto que se ha llevado el Legislador al crear para los comerciantes esa especialidad de procedimientos y de estado. Si el fin fuera el cobro de los créditos, su graduación y cuota repartible, escusada por demás consideraríamos la quiebra, teniendo el remedio comun del concurso de acreedores. Algo mas se quiere; de algo mas es acreedor el comercio de buena fe; medidas de resultados mas fecundos exige para que no se quiebre la palanca que lo sostiene y mueve, y pueda sin recelo poner en circulación los capitales, favoreciendo al que los necesita para la contratación, seguro de que los ha de recobrar con el interés corriente en la plaza: y ciertamente que, á no haberse establecido pena corporal, el crédito, esa poderosa palanca del movimiento mercantil, ó desaparecería por completo, ó arras-

traría una existencia penosa, llena de dificultades y peligros.

Los grandes resortes del hombre son el honor y el miedo: por conservar su honor hace el hombre los mayores sacrificios, hasta el último y supremo, hasta el de su vida; y llenos están los anales mercantiles de esas grandes víctimas de su probidad y buena fe: ejemplos lamentables sí, no imitables tambien; pero que en su realización descubren al hombre probo, al comerciante de buena fe, á quien desastres inculpables conducen á un término fatal. Sin embargo, no es siempre el honor la prenda característica de los hombres; y por desgracia, y con harta frecuencia véanse seres degradados que anteponen su interés privado á las prescripciones de la honradéz, y que bien hallados con capitales que no son suyos, sumirian en la miseria á sus favorecedores á no contenerlos en el límite de sus deberes el miedo de verse encerrados en una cárcel, y de espiar su fraudulencia en un presidio.

Tal es el efecto saludable de la quiebra: su institucion fortalece el principio del crédito, y sus consecuencias aseguran en poder de un hombre honrado sin capital alguno intereses de inmensa cuantía, que no se ofrecerian á un rico propietario, cuyo nombre no constara en el registro civil de matriculados.

Aplicando el principio, que ligeramente hemos tocado como preliminar de la cuestion, al desenvolvimiento de la cuestion misma, échase de ver desde luego, que no puede ser principio de escepcion, sino tan universal y completo que á todos los casos se es-

tienda, y abraza todas las individualidades. La misma influencia ejerce en el comercio de buena fe; la misma alarma produce la conducta del comerciante que cesa en el pago de sus obligaciones corrientes, cuando estas afectan á un solo individuo, que cuando corresponden á muchos; y la misma proteccion ha querido dispensar la ley en un caso que en otro: de lo contrario faltaria la lógica del precepto, y contra toda razon quedaria abandonado el primero á los recursos ordinarios de la via ejecutiva, de la declaracion de insolvencia y de la complicada de enagenaciones hechas en fraude de acreedores.

Es un principio jurídico, que *cuan- do la ley no distingue, no debe admitirse la distincion*; principio, cuya observancia se recomienda muy principalmente en todos los casos y negocios, en que no existe razon alguna para distinguir. ¿Y acaso la hay para que pueda ser declarado en quiebra un comerciante que tiene dos acreedores, y no lo pueda ser el que tiene uno? ¿Tan mezquino es el principio que presidiera á la institucion del estado de quiebra, que se le haga depender del número, y no de la esencia misma de la cosa? ¿Cambia por ventura la conducta del comerciante que suspende sus pagos corrientes, porque estos los deba hacer á un solo individuo? Buscad la razon de semejante diferencia, y de seguro no la encontrareis; y bajo este supuesto, es improcedente la distincion que quiere establecerse para el caso de ser uno solo el acreedor.

La ley no ha hecho distincion alguna, porque no debia hacerla, porque

no habia causa determinante que á ello la impulsase; y esta es la razon por qué, ya desde un principio, dispone que la declaracion formal del estado de quiebra pueda hacerse á instancia de acreedor legitimo, para comprender el caso del *único acreedor*, pues el de muchos acreedores está fuera de toda controversia. Si el legislador hubiera querido escluir al acreedor único del derecho de poder solicitar la declaracion de quiebra de un comerciante, hubiera usado la fórmula *á instancia de acreedores legitimos*, y hubiera subordinado las disposiciones sucesivas al precepto del art. 1016, redactado en semejante forma. Lejos de hacerlo así, enlaza los mas esenciales artículos de la quiebra al pensamiento general, á lo dispuesto en el art. 1016 de la manera que existe en el Código.

El art. 1025 fija los requisitos indispensables para que pueda providenciarse la declaracion de quiebra á instancia de acreedor legitimo, valiéndose del singular á la manera que el 1016; y al fijarse en los artículos sucesivos los trámites que deben observarse en la sustanciacion del incidente de reposicion del auto de quiebra, que puede promover el quebrado segun el 1028, se dispone en el 1030 que *dicho incidente se sustanciará con audiencia del acreedor que promovió la quiebra*; y si bien el mismo artículo añade, *y de cualquier otro acreedor que se oponga á la solicitud*, esto se entiende si existe otro acreedor, pues no seria justo se privase á otros acreedores del derecho de coadyuvar la accion del que solicitó la quiebra, cuando, caso de existir, tendria igual interés que el primero

en que el quebrado no obtuviera la revocacion del auto en que se dictó la declaracion.

Y de que así haya de entenderse el art. 1030, tenemos la prueba en el artículo 1032, que dice: *La reposicion podrá proveerse antes del plazo de los veinte dias, si el acreedor que promovió la quiebra conviene en ello. ó si por parte de él, ó de otro acreedor legítimo no se hiciere contradiccion dentro de los ocho dias.* La primera parte de este artículo es una de las pruebas mas concluyentes de la tesis que sostenemos. Si el acreedor que promovió la quiebra puede acceder á la solicitud del quebrado, y en su virtud queda sin efecto el auto de declaracion, siguese en todo rigor de derecho que un solo y único acreedor puede pedirla: de lo contrario, nose concibe cómo su sola avenencia puede dejar sin efecto todas las consecuencias del artículo 1044, que prescribe las disposiciones que el Tribunal debe adoptar en el acto mismo que haga la declaracion de la quiebra, entre las que se cuenta la séptima, que es la convocacion de los acreedores á la primera Junta general, la cual segun el 1062 *debe celebrarse dentro de los treinta dias desde que se hizo la declaracion judicial de quiebra.*

Compútese los dias que el acreedor que promovió la declaracion de quiebra tiene para conformarse en que se deje sin efecto, y necesariamente convendremos en que, acto de conformidad es posterior á la celebracion de la primera Junta general de acreedores, posterior irremisiblemente al nombramiento de Síndicos. ¿Y cabe en buena lógica admitir que despues de la presentacion de los acreedores, que

bien residan en el mismo punto, bien en poblaciones distantes, es lo cierto que el espresado acto les produce gastos y molestias, despues del nombramiento de los que han de representar la masa, pueda el acreedor anularlo todo por su sola y esclusiva voluntad, dejando ineficaces los derechos adquiridos por los demás acreedores convocados oficialmente por medio de los boletines y *Gaceta*? Semejante facultad es absurda, á no concretarse al caso de ser uno solo el acreedor del quebrado.

Por eso la Ley en el segundo extremo del artículo, salvando tamañas dificultades, y ocurriendo á lo que generalmente sucede, dice, *ó si por parte de él ó de otro acreedor legítimo no se hiciere contradiccion en los ocho dias siguientes á la notificacion del traslado que se confiera de la instancia del quebrado.* Estremo notable, que determina el pensamiento del legislador, abarcando el caso en que sea uno solo el acreedor, y el en que sean dos ó mas los interesados en la declaracion de quiebra.

Pudiéramos multiplicar las citas del Código, en las que aparece claro el derecho de un solo acreedor para pedir la declaracion de quiebra: pero por ahora nos concretaremos á la cita mas concluyente.

La ley de Enjuiciamiento mercantil en su título 10, al tratar de los terceros opositores en los procedimientos egecutivos, dice en el artículo 386 *á consecuencia de haberse hecho la oposicion, cualquiera que sea el título en que esta se funde, se ampliará la egecucion, si lo pidriere el egecutante, en otros bienes del deudor que cubran su crédito en caso de declararse legítima la tercera, y si este no los tuviese, le*

quedará espedido al egecutante su derecho para promover la declaracion de quiebra con arreglo al artículo 1025 del Código. Todo comentario á la clarísima disposicion de este artículo es inútil. Despachada ejecucion, pronunciada sentencia de remate, formada tercera y declarada legítima, puede el egecutante pedir la ampliacion de la trava; y si no resultaren bienes bastantes á cubrir el crédito, le queda legalmente abierto el camino para pedir la declaracion formal de quiebra. Y, preguntamos, ¿á quién reserva la Ley el derecho de pedirla? Evidentemente al acreedor egecutante y el acreedor egecutante es uno, *uno solo*, puesto que la Ley no toma en cuenta, al otorgar el derecho, el que fuera de la egecucion existan uno ó mas acreedores del reo; y no lo toma en cuenta porque no lo sabe, ni le incumbe saberlo, ni puede saberlo, luego un solo acreedor puede pedir la declaracion formal de quiebra del comerciante deudor suyo, y el tribunal debe acordarla, llenadas las condiciones del artículo 1025, aunque el segundo no tenga otro acreedor, aunque sea único y solo el que la pide.

Contestemos ahora á las razones que presentan los que están por la negativa. *La Ley*, dicen, *habla siempre de suspension de pagos, de cesar en el pago corriente de sus obligaciones, lo que supone ser varios los acreedores*. Parécenos ilógica la deducccion: los pagos lo mismo pueden afectar ó corresponder á uno que á muchos acreedores; y las obligaciones pueden deberse tanto á uno como á varios individuos: el plural de las cosas no se enlaza esencial y esclu-

sivamente al plural de las personas. ¿Esclúyese acaso, en el orden de los hechos, el que un comerciante responda á otro de varias operaciones en su origen y efectos distintos, productoras en el derecho de diferentes acciones, ó sea de medios de reclamar en juicio su cumplimiento? De ninguna manera; y semejante pluralidad de obligaciones pueden reconocer dos orígenes, uno, los actos propios del acreedor; otro, la adquisicion de obligaciones de terceras personas, que llegan por distintos medios á parar en manos de uno solo, que las utiliza como propias.

La segunda razon en que se apoya la negativa se reduce á que *la tramitacion del procedimiento de quiebra está basada en la concurrencia de acreedores*. Convenimos en que el procedimiento, tal como se encuentra en el Código, hace relacion en su mayor parte al caso comun, al en que son muchos los acreedores: y decimos en su mayor parte, porque hay varios trámites, y algunos los hemos detallado, en que solo aparece un acreedor. No obstante, convenimos en la idea y decimos que esa tramitacion no tiene lugar en el caso de ser uno solo el acreedor, puesto que la Ley supone siempre términos hábiles para su cumplimiento. El orden sucesivo de las actuaciones en la quiebra exige la ocupacion judicial de los libros, papeles y documentos de giro del quebrado: pero tales papeles no existen, no se ocupan, y no por eso queda defraudado el precepto. Asi mismo previene la convocacion de los acreedores para el nombramiento de síndicos, etc., pero no existen acreedo-

res, ó aunque los haya no quieren presentarse: queda igualmente obedecida la ley; y buen cuidado tendrá el acreedor que ha promovido la quiebra, de que se lleve á término, llenando las prescripciones que le sean peculiares, hasta conseguir el castigo del culpable, que es lo mas interesante para el comercio de buena fe.

Añádese como tercera razon, *que no basta para declarar la quiebra el que haya egecuciones pendientes, interin el comerciante manifieste, ó se hallen bienes disponibles para trabarlas.* Convenido, puesto que los acreedores han escogido la via egecutiva como medio fácil y espedito para cobrar sus créditos; y mientras existan bienes suficientes, no es lícito separarse del camino ordinario que no afecta á la honra del deudor, ni lleva consigo pena corporal, para entrar en el otro camino extraordinario, que termina en un presidio. ¿Síguese por ello que no pueda declararse la quiebra á instancia de un solo acreedor, dadas las condiciones del artículo 1025 del Código? De ninguna manera puede sacarse tal consecuencia.

Dícese por último, *que cuando hay un solo acreedor este tiene medios mas fáciles, mas sencillos, mas expeditos para cobrar su crédito, tales como la via egecutiva, si el documento es de los que traen aparejada egecucion.* Creemos que al valerse de tal argumento los autores que sostienen la negativa, han olvidado la disposicion del artículo 386 de la Ley de Enjuiciamiento mercantil, que antes hemos copiado; asi como la del 172 reducida á que *el acreedor que solicita la declaracion de quiebra de su deudor, está obligado á acreditar ante todas cosas su personalidad*

con el testimonio de la egecucion despachada á su instancia contra el mismo deudor, cuyo previo requisito se le admitirá la prueba que presente sobre los extremos comprendidos en el artículo 1025 del Código. Debe por consiguiente preceder la via egecutiva; y solo cuando no aparezcan bienes suficientes á cubrir el crédito, entra la declaracion de quiebra, que el tribunal hará sin citacion ni audiencia del quebrado, conforme el aparte del citado artículo 172. Luego procede la declaracion á instancia de un solo acreedor aunque este tenga los medios fáciles y expeditos de que se hace mérito.

Hemos fundado nuestra opinion en la letra y espíritu de la Ley, y abrigamos la conviccion íntima de que procede la declaracion del estado de quiebra de un deudor comerciante, aunque solo tenga un acreedor, siempre que la deuda proceda de operaciones mercantiles. No desconocemos la importancia de la cuestion; y de desear fuera se promoviera debate sobre tan interesante punto, á fin de que llevados al palenque de la discusion el pro y el contra, desapareciera hasta la menor duda que pueda abrigarse acerca de la solucion afirmativa que hemos dado á la tesis objeto de este artículo.

Félix Gomez La-Casa.

SECCION PRÁCTICA.

CUESTION DE PROCEDIMIENTO.

Arts. 55 y 56 de la Ley de Enjuiciamiento civil. — Dirimirán la discordia dos ministros si

hubiere sido impar el número de los discordantes, y tres en el caso de haber sido par.

Uno de los dirimientes será *siempre* el presidente en el Tribunal Supremo, y el regente en las Audiencias, concurriendo con ellos el ministro ó ministros de la Sala donde radique el pleito, que no haya asistido á la vista, y á falta de estos, los mas antiguos del Tribunal, con exclusion de los presidentes de Sala.

Esta es la Ley, clara en sus preceptos, lógica en su fin, justa y atinada en su razon suficiente, concreta en sus palabras: parece imposible que en su egecucion puedan suscitarse dudas y cuestiones: sin embargo, al decirse que algunos regentes suelen presidir Salas de justicia en que se ponen á la vista negocios civiles, instintivamente nos dirigimos la pregunta «si esto lo podrán hacer dentro del círculo de sus atribuciones, y sin faltar al precepto del legislador.»

Cuando se trata de la apreciacion de actos de personas respetables por su posicion, y en los que siempre debe reflejarse el sello de la justicia y de la legalidad, si esa apreciacion ha de ser contraria á tan necesarias é imprescindibles condiciones, entonces crecen las dificultades de apreciar, porque naturalmente un criterio que no es apasionado y parcial como el nuestro, se resiste á mirar injusticia ó infraccion legal en los encargados de aplicar la Ley, y de dar los primeros el ejemplo de una observancia inflexible.

Con tan graves dificultades hemos tropezado antes de escribir este artículo; empero como tenemos convencimiento formado sobre la cuestion, como tenemos conciencia de ese convencimiento, y conciencia que no se doblega en ninguna ocasion á eso que hoy dia ha dado en llamarse conveniencia, para disfrazar así ó la falta de cumplimiento de un deber ó una menuada adulacion, ó una hipocresía detestable, porque la hipocresía lo fue y lo será siempre; por eso, volvemos á repetir, vamos á consignar, con la lealtad y buena fe que siempre nos distingue, nuestra opinion sobre la inte-

ligencia del art. 56 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Las discordias revelan juicios y apreciaciones diferentes, ya sobre los hechos que encarna el litigio, ya sobre los derechos que ellos determinan, puesto que los hechos son los progenitores del derecho; y si los derechos se declaran, modifican ó estinguen, es siempre debido á un hecho: y en la circunspeccion de una Sala, en la ilustracion de sus ministros, y en su imparcialidad, en su detenido examen de los negocios y en su constante deseo por el acierto, no es natural que exista discordia, ni por capricho, ni por amor propio ofendido, ni por interés personal, porque los magistrados jamás lo tienen, ni por amistad, porque tampoco conocen amigos tratándose de asuntos judiciales, ni por cualquiera otra vagatela ó consideracion: discordia ante la opinion pública, ante los hombres de la ciencia, ante los abogados de las partes y ante la Ley misma, es sinónimo de cuestion grave, de ley oscura, de difícil interpretacion y aplicacion; es sinónimo, finalmente, de duda fundada, racional, de duda que necesita para resolverse de mayor ilustracion, de mayor experiencia, hijas legítimas de la antigüedad, del estudio y de la suficiencia, porque al legislador no le es dado suponer que los altos puestos de la magistratura se escalen sin merecimientos reconocidos y sin suficiencia y rectitud probadas.

¿Dónde se presumen, dónde deben encontrarse las mayores garantías de esa suficiencia? Se presumen, deben encontrarse en la antigüedad, en la experiencia, en la práctica de juzgar: de aqui el sistema planteado en la Ley de Enjuiciamiento civil para dirimir las discordias, sistema diametralmente opuesto al que habian seguido el Reglamento provisional para la administracion de justicia, y las Ordenanzas de las Audiencias; de aqui consignar el art. 56 citado que sea dirimente *siempre* en el Tribunal Supremo de Justicia su presidente, y el regente en las Audiencias, acompañados del ministro ó ministros mas antiguos del Tribunal; siempre

ice la Ley; siempre no es una voz vaga que se presta á tergiversaciones. Ocurre discordia en una Sala de Audiencia; dirimente necesario, preciso, inescusable, el regente. Ocurre discordia en una Sala del Tribunal Supremo; dirimente preciso, necesario, inescusable, el presidente. No recordamos haber visto sentencia de las muchas que todos los dias publica el Periódico oficial, á que haya concurrido el presidente: en cumplimiento de la Ley recata su asistencia, reservándola para las discordias: los regentes y el presidente del Tribunal Supremo no pueden asistir á las vistas de los pleitos civiles y de los recursos de casacion: su antigüedad en la práctica de juzgar, su experiencia, y los mayores y mas sólidos conocimientos, por lo tanto, que deben reunir, la Ley los reclama para los casos áridos, para los puntos difíciles, para las cuestiones que sean verdaderas cuestiones; en una palabra, para las discordias.

Este, y no otro, fue el pensamiento de la comision al redactarse el art. 56 ya mencionado; pensamiento que constituye una importante reforma de lo que antes se hallaba prevenido: antes, las discordias entre dos ó tres ministros debian dirimirse, por dos, y las que ocurrian entre cuatro ó mas, por tres: antes los dirimientes eran los mas modernos; ahora lo son, preciso de toda precision, el regente y magistrado ó magistrados mas antiguos; ahora, si los discordantes fueron número impar, los dirimientes han de ser dos, y tres en el caso de haber sido número par. De esta manera se consigue, constituyendo en todo caso número impar los discordantes y dirimientes, alejar el peligro de nuevas discordias onerosas siempre á los litigantes, y llevando en algun caso el desprestigio á los Tribunales.

Ateniéndonos, pues, á la letra del art. 56, á su objeto, al pensamiento que presidió en su redaccion, y á la explicacion de ese mismo pensamiento que nos dá uno de los individuos mas importantes de la comision que formuló la de procedimientos civiles, los regentes son *siempre* dirimientes precisos en toda discordia, no pu-

diendo, en su consecuencia, asistir á la vista de los negocios civiles: si lo verifican, en nuestro juicio infringen la Ley, esponiéndose á producir nulidad de la sentencia.

Supongamos una vista en que concurren dos magistrados y el regente: la sentencia que acuerden siendo el negocio civil dará motivo fundado al recurso de casacion por la causa 9.^a del art. 1,015, ó lo que es lo mismo, por haberse dictado la sentencia con número menor de Jueces del señalado por la Ley, toda vez que, no pudiendo asistir ni ser voto de vista el regente, el fallo resultaría pronunciado por dos magistrados únicamente, y pronunciado asi, lo seria por número menor del que la Ley señala.

Publicamos estas sencillas observaciones por si pueden contribuir á restablecer la verdadera inteligencia del art. 56 de la Ley de procedimientos civiles, y á evitar las nulidades y perjuicios que pueden surgir de su inexacta aplicacion.

Felipe Gonzalez del Campo.

SECCION HIPOTECARIA.

INFORMACION POSESORIA.

Al establecer la ley hipotecaria en su artículo 396, confirmado por el 333 del Reglamento que desde la publicacion de aquella, *no se admitirá en los juzgados y tribunales ordinarios y especiales en los consejos y en las oficinas del Gobierno, ningun documento ó escritura de que no se haya tomado razon en el Registro; si por él se constituyeran, transmitirén, reconocieren, modificaren ó es-tringiesen derechos sujetos á inscripcion segun la misma ley*, no podia de ningun modo desconocer la situacion especial de España. Rarísimos serán los propietarios, con relacion á la generalidad de ellos considerados, que tengan títulos completos justificativos de la propiedad. Mucho se ha adelantado en esta parte desde que

algunas disposiciones oficiales (1) hicieron presumir que llegara un día en que se exigieran requisitos esenciales, entre ellos la inscripción de los títulos, para poder disponer en general de la propiedad inmueble. El desarrollo y circulación de la riqueza pública y el establecimiento de los bancos de préstamos han sido causa directa también para que se hayan corregido en parte los descuidos ó razones extraordinarias que dejaron aquella sin justificación titulada. Sin embargo, aun es inmenso el número de propietarios que carecen de ella, y reconociendo el legislador la necesidad de un medio para conseguirla, ha establecido en el art. 197 y siguientes de la ley, la justificación posesoria, medio que, *si bien no podía inspirar desde luego tanta confianza ni tener tanta eficacia como los verdaderos títulos de propiedad, acreditará la posesión, y con el transcurso del tiempo y con llegar á ser mas antigua que la prescripción mas larga, será tan buena y tan segura como la titulación mas completa* (2).

Indudablemente este es uno de los puntos mas importantes de la ley por que afecta á la generalidad de los propietarios y está llamado á producir muy útiles resultados. Así lo reconocen todos los comentaristas, y nosotros creemos cumplir con un deber contribuyendo, en lo poco que podamos, á generalizar su conocimiento. Sin mas objeto vamos, pues, á dar una idea sucinta de los requisitos que exige la ley para semejantes informaciones procurando aclarar algunas dudas que en la práctica se han de ofrecer, si bien los límites de este artículo no nos permitirá ser todo lo estensos que deseáramos.

En primer término establece la ley como jurisdicción única para conocer en estas diligencias la ordinaria, y con el objeto de facilitar mas su sustanciación permite que en los puntos donde no reside el juez del partido, sea competente el Juez de paz con audiencia del síndico del Ayuntamiento en todos los casos en que

debiera ser oído el promotor fiscal, limitándose estos á procurar se guarden en el expediente las formas de ley (1). A pesar, pues, de los inconvenientes que tendrá el que la generalidad de los jueces de paz y síndicos, en las poblaciones rurales, no son letrados, como siempre han de estar asistidos de escribano, que se le supone perfectamente instruido, y el texto legal es bastante claro, creemos preferible esta latitud á las trabas que pudiera ofrecer el conocimiento único de los jueces de primera instancia. No dicen nada la ley ni el reglamento de apelación respecto al caso en que se desestime por el juez la información dada ó la oposición de parte legítima; como su objeto no puede ser de ningún modo coartar los medios de defensa sometiendo la decisión definitiva á la voluntad de un solo juez, en cuyo caso podría darse lugar á arbitrariedades inauditas, opinamos que se deberá seguir la regla general, apelándose para ante el tribunal inmediato ó sea para ante el juez de primera instancia ó la Audiencia en los respectivos casos. También debe tenerse presente que en todos ellos es indispensable la audiencia del promotor ó síndico, ora se trate de inscribir el dominio pleno, ora cualquiera de sus clases, pues la de los partícipes en el mismo, no puede suplir la intervención de aquellos respecto á que se guarden las formas de ley en el expediente.

El artículo 398 fija los extremos que debe abrazar el escrito; requisitos todos ellos esenciales y que no necesitan explicación alguna, debiéndose también acompañar, según el 401, el recibo del último trimestre de contribución territorial ó el que satisfizo el último poseedor si el que solicite la inscripción es su heredero, ó con audiencia de la persona ó herederos de quien proceda el derecho si es muy reciente su adquisición. Respecto á este último punto, pudiera ocurrir el caso, como en la práctica hemos tenido ocasión de observarlo ya, en que se tratase, por ejemplo, de un dominio útil que no paga contribución alguna y entonces será

(1) Art. 16 del R. D. de 26 de Noviembre de 1853.

(2) Exposición de motivos.

(1) Art. 397, ley hipotecaria.

suficiente la audiencia de los partícipes ó dueños del directo, pero haciendo mencion en el escrito de aquella circunstancia.

Tampoco se puede exigir del que lo promueva que presente el título de adquisicion de la finca ó derecho (1), ni cabe admitir otra oposicion de parte interesada que la que se contraiga exclusivamente al hecho de poseer en nombre propio, pues siendo las informaciones relativas meramente á la posesion siempre que se trate del derecho deberá ventilarse en juicio ordinario. Entendiéndose que basta para dar la informacion espresar, aunque se tenga título, que existe cualquier circunstancia que dificulta ó puede dilatar su presentacion.

El único modo fácil de acreditar aquella es por medio de testigos. El poco valor que en general tiene este medio de prueba ha hecho que en los artículos 399 y 400 exija la ley que cuando menos sean dos con las cualidades de vecinos, propietarios del pueblo ó termino en que están situados los bienes, y fija los extremos á que han de concretar sus declaraciones haciéndoles responsables de los perjuicios indebidos que puedan causar con la inexactitud de las mismas. Un poco exagerado nos parece el rigorismo de la ley en esta parte. Circunstancias habrá en que un colono, cuyos ascendientes han sido como él, arrendatarios de la finca, puedan dar razon mas exacta y segura que ningún otro testigo respecto á la posesion de que se trate, y sin embargo por no reunir las circunstancias de ser propietario y la de ser vecino ese testigo no será admisible y tal vez se imposibilite dar, en casos especiales, la informacion y cumplirse el objeto de la ley, ya porque buenamente no se presten á declarar las personas que reúnan capacidad legal, ya porque no existan. No se nos oculta que el objeto de la ley al exigir estas cualidades que quiere tambien, segun el artículo 406 que se hagan constar en la inscripcion, ha sido dar mayores garantías á la prueba admitida en justificacion del título supletorio de que trata, pero dentro de estas

garantías estaba el haber dejado, como establece en su artículo 117 la ley de Enjuiciamiento civil, la apreciacion de la prueba segun la sana crítica á la discrecion del Juez y prevenir que en defecto de aquellos dos requisitos presentaran los testigos certificaciones en crédito de su buena conducta, del párroco y del alcalde. Pero segun el literalismo de aquella se ve que son indispensables las dos circunstancias de ser los testigos vecinos y propietarios del pueblo ó termino en que estuviesen situados los bienes; pudiera nacer duda si la vecindad ha de ser de cualquiera de los pueblos que comprende el territorio del partido judicial ó del en que estén los bienes, porque en la ley no se encuentra la conjuncion copulativa, -y, -pero todos los comentaristas que hemos visto hasta de ahora lo comprenden del último modo, porque el objeto de aquella principalmente es que puedan tener certeza completa del hecho que aseguran; solo el vecino del lugar que en general de continuo está viendo la finca, que conoce á todos y sabe todas las ocurrencias que respecto á la misma tienen lugar, es el que puede dar razon exacta con mucho mas motivo cuando en el mismo tiene sus prodiedades, cualidad que no solo sirve para asegurar la responsabilidad civil, por la criminal en que pudiera incurrir, sino tambien el mayor conocimiento de la localidad: *con dos ó mas vecinos, propietarios del termino ó pueblo en que estuviesen situados los bienes.*

Para dar mayor fuerza á la informacion quiere la ley se oiga al partícipe en la propiedad ó en los derechos de que se trate, y deja á discrecion del juez para en el caso de que esté ausente el señalar termino prudencial para su comparecencia. Creemos que tanto para la citacion como para lo demás que comprende el artículo 402, convendrá atenerse á las reglas generales que establece la ley de Enjuiciamiento civil respecto la citacion y emplazamiento.

No podria privarse á quien se creyera perjudicado con el medio supletorio de que tratamos, de que usara del derecho que entendiera asistirle, y por esta razon el artículo 403 ordena

(1) Arts. 327 y 326 del Reglamento.

se acuda al juez competente y se ventile en juicio ordinario, suspendiendo la interposicion de la demanda con su inscripcion precisa en el Registro, aquel espediente; pero no entablándose recurso alguno y aprobado el mismo se debe entregar original para su presentacion en el Registro, solicitando la inscripcion que deberá hacer el Registrador luego de examinar cuidadosamente los libros, pues si resulta algun asiento que pueda quedar total ó parcialmente cancelado á consecuencia de la nueva inscripcion, debe suspender esta, anotándola preventivamente y remitir copia del asiento al juez para que, oidos los interesados, confirme ó revoque el auto de aprobacion, de cuya providencia se debe dar conocimiento al Registrador; pero si el asiento fuese de cualquiera derecho real como censo, hipoteca, etc., bastará con hacer mencion de él en la inscripcion. El objeto de la ley ha sido respetar los derechos adquiridos por un tercero legitimamente, así como tambien declara respetando la propiedad, que la inscripcion de la posesion no puede perjudicar en ningun caso al que tenga mejor derecho á la propiedad del inmueble, aunque su título no haya sido inscrito; y que la inscripcion de aquella solo perjudica á tercero en cuanto á los efectos de la mera posesion (1).

El espediente debe quedar archivado en el Registro, pero la parte tiene derecho á que por el escribano que actuó en el mismo se libre la copia ó testimonio precediendo mandato judicial y que no pueda estraerse aquel del archivo (2).

Estas son ligeramente espuestas las disposiciones relativas á las informaciones posesorias de cuyos beneficios no encareceremos nunca bastante á los propietarios se utilicen, como un medio seguro de completar la titulacion de la propiedad.

Manuel Atard.

Discurso leído por D. José María Ordoñez, en la Academia valenciana de Legislacion y Jurisprudencia la noche del 20 de Noviembre de 1862.

¿Debe hacerse la codificacion por principios generales, ó descendiendo á casos particulares?

«Nuncum aliud natura aliud
sapientia dicit.»
Juvenal.

SEÑORES:

Jamás enseñan lo contrario la naturaleza en sus elocuentes lecciones y la ciencia en sus profundas teorías; sintética y armónica aquella como Dios que la diera el sér, presta á esta su carácter de unidad y la reviste sus coloridos, señalados en el espacio y en el tiempo por las diferentes tendencias. Las ciencias y las artes en sus productos, el derecho en sus prescripciones han seguido el rumbo ora magestuoso y lento, ora rápido y borrascoso de la humanidad, reflejando con perfecta exactitud sus virtudes y sus errores; cual las límpidas aguas del arroyo marcan minuciosamente al árbol que las da sombra.

La humanidad vive; mas las ideas han pasado como fugitivos meteoros, las creencias han caído con los dioses que las produgieran, las legislaciones han sido carcomidas en abultados volúmenes por la mano poderosa del tiempo y del olvido: y es que las ideas no han sido expresion de la naturaleza, es que las creencias han basado en un falso fundamento, es, señores, que las legislaciones rastreras en su principio, han olvidado elevarse al conocimiento del hombre.

Fundamento racional este del derecho, debe seguirle en todos sus pasos; por eso se resiente de sus cataclismos, y va al través de las diferentes evoluciones de la humanidad determinándose en todas por la identidad de destinos. Sencillo pero incierto en los primeros años, tiene la pureza y veleidad de la niñez, y sino

(1) Arts. 407, 408, y 409.

(2) Art. 328 del Reglamento.

seduce con los atractivos de la ciencia, hija de la edad madura, es dulce y bello como la primera aurora de la vida. Crece la humanidad como el hombre, y como en este pasa la primavera de los años, pasa también en aquella la edad del sentimiento y la poesía; la ciencia adquiere predominio y el derecho más cierto y determinado en la ley, sino es bello como en la juventud, es solemne como la primera palpación del sér. Complicado en esta edad le veremos aparecer después armónico y sintético y elevándose á las sublimes abstracciones de la ciencia, consagrar en su forma más perfecta, en los códigos, los principios de la naturaleza. *Nunquam aliud natura aliud sapientia dicit.*

De la codificación voy á ocuparme. ¿Debe hacerse por principios generales, ó descendiendo á casos particulares? Otro más digno de ocupar este sitio, os presentaría una brillante disertación; siguiendo la marcha progresiva del derecho, pondría á vuestra vista el cuadro grandioso de sus diferentes formas; yo empero de escaso talento y de erudición bien poca, me concretaré á esponer algunas observaciones filosóficas, señalando la codificación por principios generales como más conforme á la naturaleza del hombre y de la sociedad: empresa todavía superior á mis fuerzas, pero sedme indulgentes en gracia á mi buen deseo.

Si alguna ley merece el nombre de universal, es la unidad: brilla en la naturaleza física, reina en el mundo intelectual, y la voluntad y el sentimiento aspiran incesantemente á ella. El armónico concierto de este mundo en la infinita variedad de entes que le forman, la sucesión acompasada y uniforme de los séres, la identidad de existencias, son el cántico solemne de la unidad del mundo físico. Término el hombre de la creación y su verdadero compendio, lleva en sí el sello de la unidad más acabada: juntando en una sola existencia de misterioso dualismo los extremos más opuestos, es espejo de la unidad que nos rodea, imagen fiel de la unidad á que tendemos; en su cuerpo sintetiza la belleza de lo físico, su espíritu nos hace

vislumbrar la realidad más completa, nos levanta á contemplar la unidad más absoluta. Sér uno que todas las escuelas reconocen, los ateos en la naturaleza, los panteístas en la sustancia sola, la filosofía verdadera en Dios.

Así partiendo de este origen, al descender al mundo en que vivimos; sino encontramos esta unidad absoluta y si solo unidades más concretas, tiende el espíritu humano á la concentración de lo vario, reduciendo lo múltiplo á lo uno para recoger las existencias en el punto en que se confundan. «El panteísmo en sus aberraciones, ha dicho Batmes, encierra una verdad profunda que desfigurada por varias cabilaciones se presenta como un abismo de tinieblas, cuando es en sí un rayo de vivísima luz. La perfección de todas las cosas, había dicho Fr. Luis de León, consiste en que cada una de ellas tenga en sí todas las otras, y en que siendo una, sea todas cuanto le fuese posible (1).»

Espíritu inteligente el del hombre conoce la tendencia de lo relativo á lo absoluto, de lo finito á lo infinito: de este modo la idea de lo uno nacida con él va al través de las generaciones, señalando el origen de todas las artes y las ciencias, y acompañándolas siempre en su progresivo desarrollo. La facultad de generalizar que distingue al espíritu humano del bruto, no se satisface con lo puramente individual, saliendo de lo que tiene á su alrededor y á su vista, se eleva al conocimiento de las relaciones encerrando en una idea otras muchas para conocer el conjunto, *quanto intellectus creatus est altior, tanto pauciores habet formas ad plura cognoscenda efficaces....* dice el Ángel de las escuelas (2).

(Se continuará.)

- (1) *Filosofía fundamental*. Tom. 1.º Cap. 3.º.
(2) *Quodlib.* 7, cart. 3.ª

Por todo lo no firmado, el Secretario de la redacción,
Manuel Atard.

Editor responsable: D. JOSÉ MARCO.

VALENCIA.
Imprenta de la Opinión, á cargo de José Domenech.
Calle de las Avelanas, núms. 11 y 13.